APROXIMACION AL NACIMIENTO DE LA CUESTION RELIGIOSA

NIEVES MONTESINOS SANCHEZ

Pfra. Derecho Eclesiástico del Estado

La Constitución Española de 1978 marca un hito fundamental en materia de Relaciones Iglesia-Estado en la historia del constitucionalismo español, y esto es así porque supone una novedad digna de mención, la clara intención de presentarse como superadora de la cuestión religiosa, que dividió a los españoles más radicales, de entre aquellos que fueron testigos de nuestra historia contemporánea, en dos bandos que parecieron irreconciliables.

La cuestión religiosa tuvo cabida en todos los textos constitucionales que vieron la luz, e incluso los que no la vieron a lo largo del siglo XIX y principios del XX.

En efecto, las Constituciones han sido varias y variadas, quizá demasiadas, pero ayudan a conocer la época que nacen.

Así a la Constitución de 1808 sigue la Constitución de 1812 que con derogaciones y proclamaciones la encontraremos hasta 1837, y posteriormente en período relativamente breve, conoceremos cuatro textos constitucionales, a saber, el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1837, la Constitución de 1845 y la Constitución no promulgada de 1856, sin contar con los diversos proyectos que no llegaron a convertirse en texto constitucional, pese a que alguno de ellos, tenían entidad e importancia suficientes, pero la coyuntura socio-política del país lo impidió.

La Revolución de Septiembre de 1868 supondrá un nuevo cambio constitucional, la Constitución de 1869, a la que seguirá el proyecto de constitución federal de 1873. Y una vez producida la Restauración, resultará obligado el señalar la Constitución de 1876, fundamentalmente porque estamos en presencia de la de más dilatada vigencia, ya que se aplicará hasta 1923, momento en que se implanta la dictadura de Primo de Rivera (Proyecto de 1929) y posteriormente al final de la dictadura hasta el advenimiento de la II República. El último de los textos constitucionales, la Constitución de la II República de 1931, significará el tratamiento más radical conocido en nuestro país de la cuestión religiosa y por ende de las relaciones entre la Iglesia y el estado.

Quizá por ello puedan merecer la pena estas páginas, como intento de aproximación al nacimiento de la cuestión religiosa.

1. La Constitución de Bayona

El primer texto constitucional, el Estatuto de Bayona de 1808 recoge una clara declaración de confesionalidad, la cual es consecuencia por un lado de la condición impuesta por Carlos IV para abdicar (mantener la confesionalidad católica), y por

otro de la política de Napoleón de ganarse el apoyo de la Iglesia y servirse de ella. (1).

José Bonaparte al aceptar la corona de España declaraba en Decreto de 10 de junio de 1808: "La conservación de la santa religión de nuestros mayores en el estado próspero en que la encontramos... serán nuestros primeros deberes".

Varios fueron los proyectos presentados hasta llegar a la formulación definitiva que recoge el Estatuto de Bayona de la cuestión religiosa. Igualmente distinta fue la ubicación asignada al tema religioso en cada uno de los proyectos. El primer proyecto se ocupa de la cuestión religiosa en el artículo 47, que establecía:

"La religión católica, Apostólica, Romana es la sólo cuyo culto puede ser tolerado en España". Parece ser que la importancia del tema en cuestión, hizo cambiar el lugar en un principio asignado al mismo, y así, el segundo proyecto aborda la cuestión religiosa en el artículo 1º, en el cual se decía: "La religión Católica, Apostólica, Romana es en España la religión dominante y única, ninguna otra será toleradas".

La confesionalidad apuntada en el primer proyecto se vuelve más rotunda y tajante en el segundo, e incluso, esta última formulación es más terminante que la definitiva.

El 15 de junio de 1808, la Junta de Bayona se reunió para examinar y aprobar el estatuto constitucional. Estaba formada por nobles, militares, clérigos y funcionarios del antiguo régimen, lo cual nos permite considerarla como una junta claramente conservadora. (3).

La proclamación del Estatuto de Bayona se produce el 6 de julio de 1808 y en su Título I, artículo 1º (y único), se establece: "La religión Católica, Apostólica y Romana en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey y de la Nación y no se permitirá ninguna otra". (4).

En consecuencia, el texto constitucional regula la cuestión religiosa, decantándose a favor de una clara formulación de confesionalidad, con un significado casi idéntico al que dicho término tuvo en su origen, ya que se reconoce a nivel constitucional que la religión católica será la del Rey y de la Nación, lo cual nos hace trasladarnos a principios ya lejanos como el de "cuius Regio eius et religio".

Del mismo modo, queda establecida la intolerancia más absoluta hacia las restantes religiones, sin ni tan siquiera distinguir como lo harán otros textos constitucionales entre ejercicio público o privado.

Ahora bien, si la declaración de confesionalidad no ofrece duda, quizá se trata de una fórmula realizada con la intención de satisfacer al pueblo español y alejar los recelos antireligiosos que acompañaban al rey Francés. (5). Esta tesis podría verse avalada por los siguientes argumentos:

En los acuerdos pactados por la Constitución de Madrid de 4 de diciembre de 1808 se estipuló: "La conservación de la religión católica, apostólica y romana sin tolerancia de otra alguna, así como la conservación de las vidas, derechos y propiedades de los eclesiásticos seculares y regulares, conservándose el respeto debido a

los templos conforme a nuestras leyes" (6). En este pacto se sigue la línea establecida en el texto constitucional.

En segundo lugar, esta línea de marcada confesionalidad se quiebra fácil y rápidamente con las reformas religiosas que retiradas en un principio de la Constitución aparecen ahora. El Santo Oficio queda suprimido y sus bienes incorporados a la Corona. Los conventos quedaron reducidos con el pretexto de que su número era excesivo y perjudicial a la prosperidad del Estado (Decretos de Chamartín).

Por último, podemos resumir los principios rectores de la política religiosa de la época una vez establecidos los frenos necesarios de la Religión, que era considerada constitucionalmente como de la Nación, en: a) captación del clero y de los frailes, b) reducción del personal eclesiástico, c) supresión de regulares, d) desamortización, e) apoyo al clero parroquial (ya que cuando el rey José vuelve a entrar en Madrid busca en la religión la legitimación de su poder), f) usurpación de la jurisdicción eclesiástica. Por todo ello, los celos antirreligiosos a los que antes hacíamos referencia, quizá no iban tan desencaminados.

Siguiendo el íter constitucional, nos encontraríamos con la Constitución de 1812, pero no podemos adentrarnos en ella sin hacer por lo menos mención del proyecto de constitución presentado por D. Alvaro Flórez Estrada ante la Junta Central de Sevilla el 1 de noviembre de 1809. La intención de dicho proyecto por lo que afecta a la cuestión religiosa era diametralmente opuesta a la que quedó plasmada en el texto del Estatuto de Bayona; en él se pretende el establecimiento de la libertad de cultos, y se proponía que ningún ciudadano fuese incomodado en su religión "sea la que fuera" (7).

Las tentativas librecultistas no llegaron a verse recogidas en texto constitucional, porque el proyecto quedó en eso, en proyecto, y en el texto constitucional del 12 tampoco tendrían cabida.

2. La Constitución de Cádiz

La Constitución de Cádiz es claro reflejo de la situación socio-política por la que atraviesa el país en aquellos momentos, incluso es un texto que expresa la historia española del siglo XIX.

Y si tal afirmación puede ser válida en términos generales, el tratamiento que las Cortes de Cádiz dan a la cuestión religiosa es todavía más significativo y su resultado final fue el de una reforma a medio camino que pareció corta a los innovadores y abusiva a los liberales. (8).

La Constitución de 1812, incluso en mayor medida que la de Bayona de 1808, supone una fórmula de compromiso. No encontramos en la historia constitucional española, ni en constituciones de otros países, una declaración con el mayor rango normativo que suponga una profesión de religiosidad tan palmaria. De no ser así, no sería fácil interpretar el texto constitucional, no tendría sentido el encabezamiento, la llamativa afirmación de confesionalidad, la prohibición de la libertad de conciencia... sobre todo teniendo en cuenta que estamos en presencia de una constitución que nace con un marcado espíritu liberal. (9).

El texto del artículo 12 de la Constitución de Cádiz no nació en los términos en que posteriormente quedó plasmado y hoy conocemos. En un primer momento el texto del artículo era "La Nación española profesa la religión católica, apostólica, romana, única verdadera con exclusión de cualquier otra". (10).

Cuando en diciembre de 1811, exactamente el 2 de diciembre, empieza la discusión sobre el precepto en el que quedará, de manera fundamental, regulado el tema religioso, no se pueden dejar de tener presentes las afirmaciones que se habían vertido en el Discurso Preliminar: "La declaración solemne y auténtica de que la religión católica, apostólica, romana es, y será siempre, la religión de la nación española con exclusión de cualquier otra ha debido ocupar en la ley fundamental del Estado un lugar preeminente cual corresponde a la grandeza y sublimidad de su objeto". (11).

Pese a que en ocasiones se haya afirmado lo contrario, parece ser que las Cortes de Cádiz no tuvieron nada de impías, la tercera parte aproximadamente de sus componentes pertenecían al estado eclesiástico (12) y comenzaban sus sesiones con la misa del Espíritu Santo. Según afirma REVUELTA "Los diputados están plenamente convencidos de que sin religión no es posible la permanencia de una sociedad justa, libre y ordenada y de que es precisamente la religión católica, la que mejor se acomoda a un gobierno ilustrado". (13).

A la vista de tales observaciones no es de extrañar que el texto gaditano en el que queda recogida la cuestión religiosa quedará como sigue en su artículo 12: "La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra" (14). E incluso llegó a sugerirse por el presidente que el texto fuera votado por aclamación (situación a la que no hubo lugar).

De la observación y análisis del texto legal, y teniendo en cuenta el desarrollo posterior de los acontecimientos y disposiciones legales se podrían hacer las siguientes matizaciones:

Nos encontramos ante una regulación de la cuestión religiosa por medio de una declaración clara de confesionalidad, ya que no es necesario deducirla del tenor literal del texto sino que en el mismo se establece expresamente: "La religión de la Nación española es y será perpétuamente la católica, apostólica, romana".

Ha desaparecido la fórmula utilizada en la Constitución de Bayona en la que se hacía referencia tanto a la Nación como al Rey. Se acoge pues la confesionalidad como religión nacional sin diferenciar entre rey y ciudadanos.

La admisión de la religión católica como la de la Nación no queda únicamente ahí, sino que además esta confesionalidad es calificada y especificada como "...única y verdadera...". No es simplemente una declaración de confesionalidad, sino una confesionalidad dogmática, ya que los padres de la patria valoran a la religión de verdadera y única, lo que no volveremos a encontrar en ningún otro de los textos constitucionales, excepción hecha de la Ley de Principios del Movimiento Nacional, en su principio II; con la particularidad de que no se trata de un texto constitucional, si bien forma parte del cuerpo legal de mayor rango jurídico vigente en el período Franquista.

Además, en el precepto legal que analizamos, se plasman a renglón seguido dos afirmaciones yuxtapuestas, que no necesariamente complementarias, a saber, de una parte "La Nación la protege con leyes sabias y justas", y de otra "... prohíbe el ejercicio de cualquier otra". La primera de ellas va a dar lugar en el devenir de los acontecimientos a la ingerencia e intervención ya directa, ya indirecta, del estado en los asuntos y materias que en principio son competencia exclusiva de la Iglesia, la cual, recordemos, cuenta con un reconocimiento y respaldo constitucional, cuando menos a nivel formal. Esto va a remontarnos a las mejores épocas regalistas (15).

La segunda, nos sitúa en igualdad de condiciones por lo que respecto a las restantes confesiones que el texto de Bayona, es decir, sigue defendiéndose la tesis de la intolerancia hacia las demás religiones, no distinguiéndose tampoco ahora entre el culto privado o público.

Como resulta evidente de lo expuesto, es el artículo 12 el que en el texto de Cádiz define la cuestión religiosa y en consecuencia establece el marco dentro del cual deben desarrollarse por imperativo constitucional las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Ahora bien, existen otros artículos que guardan una clara relación con el tema, alguno de los cuales abundan en el espíritu confesional (16) y otros lo desarrollan o matizan y en consecuencia no aportan nada especialmente significativo, por ello no entramos en el estudio pormenorizado de los mismos.

Por contra, sí parece representativo tanto del clima y composición de las Cortes en aquel momento, como de la fuerza del sentimiento religioso tradicional y en suma de la importancia de la cuestión religiosa, la invocación a la Trinidad con la que comienza tan importante Constitución que, nunca mejor dicho, rezaba así: "En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad". En este encabezamiento palpita una seria confesión de fe y una afirmación de la ética social cristiana que pone en Dios la fuente última del poder y de la soberanía, así como el origen y fundamento de la sociedad (17). De modo semejante el profesor SANCHEZ AGESTA mantendrá que "éstos términos no son una fórmula ritual, sino que tienen un valor preciso y medido por los propios constituyentes: considerar a Dios como fundador de la sociedad y su supremo legislador, con lo que queda definido el origen divino de la sociedad y del poder" (18).

Ciertamente esta invocación trinitaria parece estar en contradicción con el espíritu liberal que animaba a gran parte de los legisladores gaditanos, los cuales llegaron a ceder tan solemnemente la suprema potestad de legislar la sociedad.

Incluso si seguimos el Diario de Sesiones descubriremos testimonios importantes que aluden a la invocación que nos ocupa, y de entre ellos cabe destacar los de algunos diputados que pretendían se hiciese una protestación más solemne de la fe católica, o que ésta se ampliara, y por supuesto las reflexiones realizadas por aquellos que consideraban totalmente oportuna e importante la invocación referida por cuanto se mantiene en la línea del más puro sentimiento religioso tradicional de la Nación, del que debe darse testimonio al mundo entero. (19)

Por todo ello, y en cuanto que quedó plasmado en el texto constitucional de 1812, podríamos concluir sosteniendo que no fue el texto de la constitución especial

o marcadamente revolucionario por lo que respecta a sus principios políticos, ahora bien, si fue impecablemente confesional en el sentido religioso. (20)

Como se ha afirmado en múltiples ocasiones, el más grave legado que las Cortes de Cádiz dejaron a las posteriores legislaciones del siglo fue la llamada cuestión religiosa. Y aunque pueda defenderse la exactitud de esta tesis, parece del mismo modo cierto que no fueron las prescripciones constitucionales del texto del 12, las que provocaron la cuestión religiosa, e igualmente puede asegurarse que quienes creyeron que con el artículo 12 ya citado quedaban garantizados la inalterabilidad de los principios y privilegios eclesiásticos se engañaban lastimosamente (21).

Si andamos sobre nuestros pasos, podremos recordar que esta Constitución recoge una fórmula de compromiso, fruto incuestionable de las circunstancias históricas, y no del espíritu que inspiraba y animaba a los liberales gaditanos, y en dicha fórmula quedó encerrada la posibilidad de que la unidad católica, dogmatizada y defendida constitucionalmente fuera principio constitucional que estaba destinado a ser incumplido con mayor o menor facilidad o habilidad. Siempre, teniendo como base los términos constitucionales en los que insistiendo en la confesionalidad ya declarada se decía: "...La Nación la protege por leyes sabias y justas...". Y en nuestra opinión las leyes que emanaron de las Cortes no supusieron en principio una protección o defensa de la confesionalidad constitucionalizada, siendo en consecuencia del conjunto de lo expuesto del que derivó la cuestión religiosa.

ARGÜELLES lo explica claramente tomando como punto de apoyo el contrasentido de dos términos teóricamente enfrentados, intolerancia - espíritu liberal, destinados ahora a entenderse porque así lo aconseja la estrategia constitucional: "En el punto de la religión se cometió un error grave, funesto, origen de grandes males, pero inevitable. Se consagraba de nuevo la intolerancia religiosa, y lo peor era que, por decirlo así, a sabiendas de muchos que aprobaron con el más profundo dolor el artículo 12. Para establecer la doctrina contraria hubiera sido necesario luchar frente a frente con toda la violencia y furia teológica del clero, cuyos efectos demasiado experimentados estaban ya, así dentro como fuera de las Cortes. Por eso se creyó prudente dejar al tiempo, al progreso de la ilustración, a la docta controversia de los escritores, a las reformas sucesivas y graduales de las Cortes que se corrigiese, sin lucha ni escándalo, el espíritu intolerante que predominaba en una gran parte del estado eclesiástico." (22)

En efecto, con la legislación posterior se consiguió en parte lo que no habría sido posible en el precepto constitucional y así, sobre la base de una religión tradicional venerada en toda su pureza y con el pretexto de protegerla, los innovadores lograron implantar la táctica regalista de prevalencia estatal sobre la Iglesia.

Y si observamos el conjunto de las disposiciones legislativas referidas a materias eclesiásticas a lo largo de 1811, 1812 y 1813, encontraremos en ellas una síntesis de tendencias opuestas.

De las Cortes brotaron multitud de disposiciones (23) que regularon los fondos de obras pías, la retribución de clérigos, la provisión de beneficios, la enajenación

de bienes eclesiásticos... Podríamos destacar algunas de entre ellas como: Decretos de 1 de diciembre de 1810, 16 de abril de 1811, 22 de agosto de 1811 y órdenes de 17 de abril de 1811, 6 de mayo de 1811, 2 de diciembre de 1810 sobre prebendas eclesiásticas; Decretos de 28 de enero de 1811, 22 de agosto de 1811, 20 de abril de 1811, orden de 4 de agosto de 1811 e instrucción de 20 de mayo de 1811 sobre fondos de obras pías aplicados a gastos del Estado; Decreto de 20 de abril de 1811 sobre pensiones eclesiásticas que se aplican al Estado; y Decreto de 8 de mayo de 1811 sobre bienes de iglesia que tienen el mismo destino.

Se establece el secuestro en beneficio del Estado de todos los bienes pertenecientes a establecimientos públicos, cuerpos seculares eclesiásticos o religiosos de ambos sexos que hubieran sido disueltos, extinguidos o reformados por resultas de la invasión enemiga i de providencias del Gobierno.

Podemos asegurar que la iglesia pagó más que ninguna otra organización el mantenimiento de la guerra de la Independencia y si se dieron oposiciones por parte de prelados fue fundamentalmente por considerar que la manera autoritaria con que eran exigidas las exacciones iba en contra de la inmunidad eclesiástica, o porque al prohibir la concesión de prebendas se privaba a los obispos de la libertad y el derecho que tenían a otorgarlas.

Siguiendo la misma línea, por decreto de 1812 quedó suprimida la carga conocida en varias provincias como “voto de Santiago” o contribución que era pagada por los campesinos de algunas regiones al cabildo compostelano.

Puede considerarse que con tales medidas quedaba bastante limitada la influencia y actuación de la iglesia.

Pero no fueron ellas solas las medidas y circunstancias que trajeron como consecuencia lógica la debilitación de la influencia de la Iglesia. A estas alturas de la reflexión que nos ocupa debemos citar tres aspectos que hemos dejado de lado hasta el momento, por considerarlos quizá los más fundamentales y explicativos de la cuestión religiosa que derivó de la Constitución de Cádiz. Y no son otros que: la libertad de imprenta, la abolición de la inquisición y la enseñanza.

MENENDEZ PELAYO (21) mantiene la tesis de que si bien en la confección del artículo 12 no se presentaron obstáculos fundamentales, sí surgieron estos y serias dificultades al plantearse y establecerse la libertad de imprenta y la supresión de la Inquisición. I se consiguió la omnímoda libertad de escribir y si bien los propios constituyentes no se atrevieron a sostener hasta sus últimas consecuencias legales la libertad religiosa, les pareció suficiente con echar por tierra la jurisdicción del Santo Oficio, único tribunal que podía hacer efectiva la responsabilidad de los delitos religiosos.

La libertad de imprenta quedó sancionada con referencia exclusivamente a la temática política, pero aún así fue aprovechada para dar cabida al ataque directo o velado contra la Iglesia y la religión, siendo de destacar el impacto que tales manifestaciones producirían en el pueblo.

Por lo que respecta a la abolición de la Inquisición (25), es obvio que lo que interesa no es tanto la Inquisición misma sino su significado. La Inquisición que

había ya desaparecido con José Bonaparte, y hecho su reaparición bajo la fórmula de las Juntas de Fe, vuelve a desaparecer de nuevo. Es tanto ahora como en épocas posteriores como el Guadiana de las instituciones eclesiásticas y su existencia o no vendrá de la mano de la alternancia en el poder de conservadores o liberales. La supresión del Santo Oficio privará a los integristas de su más poderoso instrumento y la caída del mismo se producirá fundamentalmente por las limitaciones que suponía para el ejercicio de la libertad de pensamiento y conciencia.

El hecho cierto fue que se le achacó públicamente la ignorancia de la religión, el atraso de las ciencias, la decadencia de las artes, del comercio y de la agricultura y la despoblación y pobreza de España.

El debate sobre la Inquisición fue representativo y característico de la diversidad de posturas encontradas que existían.

Ningún debate produjo tanto apasionamiento dentro y fuera de las Cortes como el que se ocupó de la Inquisición, pareciendo esto increíble si tenemos en cuenta la decadencia en que había caído el Santo Oficio; pero comprensible, si pensamos en lo que significaba la Inquisición, pues había quedado como un mito y símbolo de la concepción religiosa i tradicional de España. La defensa o el rechazo del Santo Oficio sirvió para deslindar campos políticos y fue uno de los elementos impulsores del dramático desgarramiento espiritual de la España contemporánea (26).

Nos queda por analizar, aunque sea someramente, un último punto: la enseñanza, que se va a ver influido e influirá en el tema central de la cuestión religiosa. En general los artículos de la Constitución en los que se regulaba revelaban un recelo hacia la Iglesia, esto produjo que quedara atribuido a las Cortes el establecimiento de planes y estatutos especiales que guardaran relación con la instrucción pública, y que se estipulase la uniformidad del plan general de enseñanza. Por otro lado, parece necesario destacar el hecho de que el Estado debía cuidar de que el niño se instruyera en el catecismo de la religión católica al mismo tiempo y del mismo modo que en sus obligaciones civiles.

Es por todo lo examinado, por lo que podemos concluir cerrando con ello el análisis de la Constitución y las Cortes de Cádiz, que en ella queda consagrada una manifestación expresa de confesionalidad, pero al mismo tiempo y tomando como punto de apoyo el precepto constitucional que obligaba al Estado a proteger la religión constitucionalizada en el mismo, las Cortes van a dictar multitud de medidas que implicaron fuertes cortapisas al desarrollo de la actividad e influencia de la Iglesia. De ahí que algunos autores hayan hablado del doble juego llevado a cabo por dichas Cortes (27).

Y como lo cierto es que, aunque las constituciones no tienen vigencia permanente, y a unos textos constitucionales siguen otros con menor o mayor rapidez como ha ocurrido en nuestra historia constitucional, estos textos constitucionales no nacen y mueren en sí mismos sino que las discusiones y debates que en ellos se encierran perviven en ocasiones más que los preceptos en los que quedaron dilucidadas y establecidas. Esto sin ir más lejos es lo que pasó con la cuestión religiosa que quedará como herencia en las discusiones políticas del siglo cuando de nuevo se

aborden temas como la abolición del Santo Oficio, la libertad de pensamiento, la tolerancia religiosa, etc...

NOTAS

- (1) Cfr. J. M. LABOA, *Iglesia y Religión en las Constituciones españolas* (Madrid 1981), 10.
- (2) Vid. LAFUENTE, *Historia Eclesiástica de España* (Barcelona 1859), VIII, 464.
- (3) Cfr. D. BASTERRA, *El Derecho a la libertad religiosa y su tutela jurídica* (Madrid 1989), 186.
- (4) Vid. A. MOLINA, *Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*. EDICEP (Valencia 1983), 145.
- (5) Cfr. P. A. PERLADO, *La libertad religiosa en las Constituyentes del 69* (Pamplona 1970), 24.
- (6) LAFUENTE, op. cit., 464.
- (7) M. REVUELTA GONZÁLEZ, "La Iglesia española ante la crisis del antiguo régimen", (1803-33), *Historia de la Iglesia en España*, vol. V BAC (Madrid 1979), 28-26.
- (8) Cf. M. REVUELTA GONZÁLEZ, *Política religiosa de los liberales en el siglo XIX* (Madrid 1973), 25.
- (9) Cf. J. M. LABOA, op. cit. 13-14.
- (10) Vid. M. REVUELTA, *La Iglesia española*, op. cit. 42.
- (11) ARGÜELLES, *Discurso Preliminar*.
- (12) Las cifras de sus componentes varían según los autores. Para SOLÍS, historiador de Cádiz y sus Cortes, había 90 eclesiásticos, de ellos 21 canónigos, 6 obispos y 3 inquisidores; 56 juristas, de los que 22 eran fiscales; 30 militares, 9 marinos, 14 nobles, 15 catedráticos, 49 altos funcionarios, 8 comerciantes y 20 diputados sin profesión definida. Mientras que para FERNÁNDEZ ALMAGRO las cifras son de 97 clérigos, de ellos 3 obispos; 60 juristas, 55 burócratas, 37 militares, 16 catedráticos, 8 nobles y 35 más entre propietarios, comerciantes, escritores y médicos. Citados por D. BASTERRA, op. cit., 190, nota 23.
- (13) Vid. M. REVUELTA GONZÁLEZ, op. cit., 36.
- (14) Vid. A. MOLINA MELIÁ, op. cit., 148.
- (15) Para el regalismo español pueden utilizarse los esquemas y la bibliografía expuestos en DE LA HERA, *El Regalismo borbónico* (Madrid 1963) y *Notas para el estudio del regalismo español en el siglo XVIII*, *Atti del Convegno Internazionale di Studi Muratoriani*, Módena 1972 (Firenze 1975).
- (16) Baste citar a este respecto las fórmulas de juramento que quedan plasmadas en el texto gaditano. Así, y en cuanto a los diputados, el artículo 117 establecía: "¿Juráis defender y conservar la Religión Católica, apostólica, romana, sin admitir otra alguna en el Reino?", y terminaba diciendo: "Si así lo hicierais, Dios os lo premie, y si no, os lo demande". En términos semejantes, el Rey debía jurar, defender y conservar la religión católica, sin permitir otra alguna en el Reino (artículo 173).

- (17) Vid. M. REVUELTA GONZÁLEZ, op. cit., 42.
- (18) Vid. L. SÁNCHEZ AGESTA, *Historia del Constitucionalismo español* (Madrid 1978), 68.
- (19) *Diario de Sesiones*, 25 de agosto de 1811. Merecen destacarse las intervenciones realizadas por los diputados SIMÓN LÓPEZ y RIESCO entre otros.
- (20) Vid. L. SÁNCHEZ AGESTA, op. cit., 114.
- (21) Cfr. F. FERNÁNDEZ SEGADO, *Las Constituciones históricas españolas* (Madrid 1986), 94.
- (22) Vid. A. ARGÜELLES, *La reforma constitucional de Cádiz*, estudio y notas por J. CONGARAS (Madrid 1970).
- (23) En cuanto a la actividad legislativa de las Cortes de Cádiz, pueden consultarse además de las obras ya citadas de F. FERNÁNDEZ SEGADO y P. A. PERLADO, a M. REVUELTA, "La Iglesia española ante la crisis del Antiguo Régimen (1803-1833)", *Historia de la Iglesia en España* (Madrid 1979), vol. V, 3-313. Así mismo resulta interesante la clasificación por materias y tipos de normas que se contiene en la obra de J. CHOPRE SIRVENT, *Codificación de las normas aprobadas por las cortes* (1810 - 1837), Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1992.
- (24) Cfr. M. MENÉNDEZ PELAYO, *Historia de los heterodoxos españoles* (Madrid 1978), BAC, vol. II, 698-710.
- (25) F. MARTÍ GILABERT, *La abolición de la Inquisición en España* (Pamplona 1975).
- (26) Cfr. M. REVUELTA GONZÁLEZ, op. cit., 46-52.
- (27) Entre ellos P. A. PERLADO, op. cit., 25, y D. BASTERRA, op. cit., 196.